

hecho quede definitivamente legitimado, y así es como hoy debe estimarse la declaración hecha con respecto al diputado Llamas.

Quinto: que en consecuencia ha sido legítima y competente la Legislatura del Estado de Morelos al expedir la ley de presupuestos.

Considerando, en cuanto á la manera con que fué electo el Gobernador que sancionó la ley:

Primero: que el vicio que se le objeta por no haber obtenido los dos tercios de votos del Estado, no es de estimarse por la Justicia federal, por no ser ese derecho de la esencia del sistema, sino propio del Estado, y de su exclusiva responsabilidad.

Segundo: que el segundo vicio que se objeta de haber sido electo en controversia al artículo constitucional que prohíbe la reelección, y sin que tal artículo se hubiera reformado de la manera que la misma Constitución previene, si es un vicio que afecta á la esencia misma del Gobierno republicano representativo, y al régimen constitucional que la Constitución federal garantiza á los Estados por sus artículos 109 y 41.

Tercero: que está probado bien y cumplidamente, que la reforma del artículo constitucional relativo, no se hizo de la manera que la misma Constitución previene.

Cuarto: que en consecuencia, el Gobernador de Morelos al sancionar la ley de presupuestos, ha obrado como autoridad ilegítima, y por lo mismo incompetente.

Por tales razones y fundamentos, y con apoyo de los artículos constitucionales citados, se decretó: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior, que declaró: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Pío Bermejillo, D. Joaquín García Icazbalceta Hermanos y D. José T. Guerra, contra la ley de Hacienda del Estado expedida en 12 de Octubre de 1873, que el director de rentas de Morelos trata de aplicarles.

Devuélvase las actuaciones al Juez de

TOMO VI.—PARTE II.

Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arleaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Najara.—Ignacio M. Altamirano.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.*

Es copia que certifico.—México, Abril 17 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por la Sra. D^a Francisca Flores, contra el C. Gobernador del Estado, que le mandó derribar una finca de su propiedad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Jefe de Hacienda del Estado con funciones de Promotor fiscal, dice: que la Sra. Doña Francisca Flores de David considerándose atacada en la garantía individual que otorga nuestro Código fundamental en su artículo 27, para que la propiedad no sea ocupada sino con su consentimiento y previa indemnización de su valor, sin cuyos requisitos dice, el Gobierno del Estado mandó demolerle una casa situada al pie del cerro de San Miguel, á espaldas del teatro que se está construyendo en la plazuela de la "Constancia," por cuyo motivo ocurrió ante V. impetrando el amparo correspondiente de la Justicia federal, apoyada en la fracción 1^a del artículo 19 de la ley de 20

de Enero de 1869, y al efecto se abrió y tramitó el juicio correspondiente.

En el trascurso de este, la Sra. Flores ha probado la compra del terreno y fabricacion de la finca, negando haber enajenado la casa al Gobierno del Estado para ampliar el teatro que se está fabricando; pero en oposicion el C. Gobernador ha demostrado que dicha finca le pertenece por haber celebrado trato con la Sra. Flores para disponer de la finca, y al efecto se procedería al valor de ella ejecutado en precio de tres mil pesos.

Hay á juicio de esta promotoría que tener presente, que segun el certificado que obra á fojas 9 de dicho juicio, expedido por el Juez de 1ª instancia Lic. Luis Caroba, existe ya un juicio pendiente entre el Gobierno del Estado y la Sra. Flores sobre cumplimiento de un contrato, en el cual se apoyó la destruccion de la casa; y mientras este juicio no se falle en los tribunales, se duda de quien es la propiedad de la finca, y no existiendo esta, es inquestionable que no puede alegarse la garantía que otorga el artículo constitucional, ni cabe legalmente el juicio de amparo que se tiene promovido.

Con tal motivo, y apoyado en estas razones, el Promotor pide: que el Juzgado de su digno cargo se sirva declarar: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Sra. Doña Francisca Flores de David, contra el acto del Ejecutivo del Estado que tiene reclamado.

Guanajuato, 1º de Abril de 1874.—*José P. de Leon.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, 10 de Abril de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por Doña Francisca Flores, contra el C. Gobernador del Estado, que mandó derribar una finca de la propiedad de la quejosa, situada en la plaza de la Constancia, á espaldas del teatro que se está construyendo en esta Capital, con cuya determinacion conceptúa la

promovente que se ha violado en su perjuicio la garantía que otorga el artículo 27 de la Constitucion federal. Visto el informe del citado funcionario, que opina que no debe concederse el amparo que se solicita, por falta de personería de la Sra. Flores que se ha presentado á litigar sin licencia de su marido; por no haberse infringido la garantía invocada, supuesto que el Gobierno ha procedido en virtud de un convenio celebrado enteramente á gusto de la misma Señora, y por que estando pendiente el juicio sobre cumplimiento de aquel convenio, hasta que ese juicio no termine, no podrá saberse si la conducta del Gobierno es ó no violatoria de alguna garantía constitucional. Vistas las pruebas rendidas por la parte actora sobre adquisicion de la superficie en que está edificada la casa en cuestion; sobre el hecho de haberla fabricado ella misma y sobre el estado en que la dejó la obra de demolicion ordenada por el C. Gobernador. Visto el pedimento fiscal que pretende se deniegue el amparo, en atencion á que pendiente el juicio iniciado por el Gobierno contra la Sra. Flores, se duda á quien pertenece la propiedad del edificio, no puede alegarse la garantía del artículo constitucional aducido, ni cabe legalmente el recurso intentado. Vista la citacion para sentencia y todo lo demas que se tuvo presente y verconvino; resultando, que en el incidente suscitado por D. Emilio David, y agregado á estas diligencias, hay un auto que declara, no ser necesaria la licencia marital para que la Sra. Flores pueda pedir amparo; cuyo auto, por no haberse hecho valer oportunamente en su contra ningun recurso legal, ha quedado ejecutoria conforme á la legislacion vigente.

Considerando: que el Gobierno no ha justificado el convenio que dice haber celebrado con la Sra. Flores, sobre compra-venta de la finca de que se trata.

Considerando: que tampoco consta que haya tomado posesion del inmueble referido.

Considerando: que sus derechos son liti-

giosos, como comprador, según lo acredita la existencia del plito que sigue contra la Sra. Flores, sobre cumplimiento del convenio de que se ha hecho referencia.

Considerando que mientras esos derechos no sean reconocidos y declarados en juicio, el Gobierno no puede apoderarse de la mencionada finca, ni derribarla, sin atentar á la propiedad ajena, sin hacerse justicia por sí mismo y sin ejercer violencia para reclamar su derecho.

Considerando que no son materia de estos autos los preceptos del Código civil alegados por la autoridad informante, para demostrar que una vez perfeccionada la venta, el comprador se hace dueño de la cosa comprada; pues la aplicación de tales preceptos corresponde al Juez de lo civil, ante quien se ventila el litigio entablado por el Gobierno contra la peticionaria.

Considerando que por no aparecer todavía el Gobierno como comprador y legítimo propietario y poseedor de la referida finca, ha conculcado el artículo 27 del Pacto federativo, ocupando la propiedad de la promovente, sin su pleno consentimiento y sin indemnización previa.

Por estas consideraciones, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Doña Francisca Flores, contra la providencia del C. Gobernador del Estado, en virtud de la cual se ha procedido á demoler una finca de la propiedad de la quejosa, sin los requisitos que exige el artículo 27 de la Carta fundamental de la República. Notifíquese este fallo á las partes; publíquese en el periódico oficial del Estado y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales.

Así el C. Juez de Distrito sentenciando definitivamente y actuando por receptoría, lo decretó y firmó. Damos fe.—*Albino Torres.—Antonio Villaseca.—Manuel A. Silico.*

Recurso de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 27 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por la Sra. Doña Francisca Flores, ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra el C. Gobernador del Estado que le mandó derribar una finca de su propiedad; visto el informe del C. Gobernador, en que oponiéndose á que se le diera entrada al recurso de amparo por no presentar la Sra. la licencia marital para comparecer en juicio, exponiendo que tienen formulada una estipulación de venta con la referida Sra. y que al proceder á estenderse la escritura, se rehusó á hacerlo, fundada en que no estaba conforme con el precio, y por cuya renuncia el mismo Gobierno tiene entablada demanda contra la Sra. Flores sobre cumplimiento de lo estipulado; que el Gobierno creyéndose ya con derecho sobre la finca, determinó entrar en la posesion de ella, tanto mas cuanto que asegura que la misma propietaria comenzó á derribarla; vista la prueba rendida por la quejosa; el parecer fiscal; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente; y Considerando que de autos aparece que la Sra. no ha recibido cantidad alguna previamente por indemnización, con arreglo á la prevencion del artículo 27 constitucional; que por la misma razon, mientras la autoridad judicial respectiva no decida sobre la demanda interpuesta por el Gobierno contra la Sra. Flores, este no puede disponer de la propiedad de la casa en cuestion, sin violar en la persona de la quejosa las garantías que en su favor invoca, con fundamento de los artículos 27, 101 y 102 constitucionales, y por los propios fundamentos en que se apoya la sentencia del Juez de Distrito, se decreta que es de confirmarse y se confirma la referida sentencia que declaró que la Justicia de la Union ampara y protege á la Sra. Doña Francisca Flores, contra la providencia del C. Gobernador del Estado, en virt

de la cual se ha procedido á demoler una finca de la propiedad de la quejosa sin los requisitos que exige el artículo 27 de la Carta fundamental de la República.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Mayo 14 de 1874.—*Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. Diego Gonzalez Mendez, como defensor del reo José Victoriano, contra los procedimientos del Cefe político de Tehuacan, que le ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena capital, por delito de homicidio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Diego Gonzalez Mendez, como defensor del reo José Victoriano, contra el C. Cefe político de Tehuacan, por haberlo condenado á sufrir la pena capital, ante V. dice: que en la causa instruida á dicho José Victoriano, hay constancias inequívocas de que el delito por que se lo juzgó y sentenció, es el de homicidio con circunstancias agravantes, cuyo conocimiento

corresponde única y exclusivamente á los jueces ordinarios.

Así pues, el hecho de habérsele impuesto una pena tan terrible por autoridad incompetente, cual es la Jefatura política del Distrito mencionado, importa una violación flagrante del artículo 13 de la Constitución general que dice: "En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales" y el reo José Victoriano, ha sido juzgado por la ley de 3 de Mayo, que es privativa y se refiere á los saltadores y plagarios, en cuyo caso no está el promovente; y sentenciado por la autoridad política que debe reputarse como Tribunal especial, establecido para conocer de las causas indicadas.

En tal virtud, el amparo intentado por el C. Diego Gonzalez Mendez procede y debe otorgársele por el Juzgado de su digno cargo, á fin de que el reo se consigne al tribunal de 1ª instancia de Tehuacan, para que le juzgue con arreglo á derecho. Sírvase V. C. Juez, así determinarlo, como se lo pide el suscrito con fundamento del artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Zamagoza, 28 de Febrero de 1874.—*E. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, 11 de Marzo de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Diego Gonzalez como defensor de José Victoriano, contra los procedimientos del Cefe político del Distrito de Tehuacan, que consisten en haberlo juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873; el esento en que se interpone el recurso; el informe de la autoridad responsable; la causa instruida y presentada en calidad de prueba; el parecer fiscal y cuanto ha debido verse y atenderse.

Considerando: que el defensor del reo para conseguir su objeto de que la Justicia federal ampare á su defendido, ha hecho va-